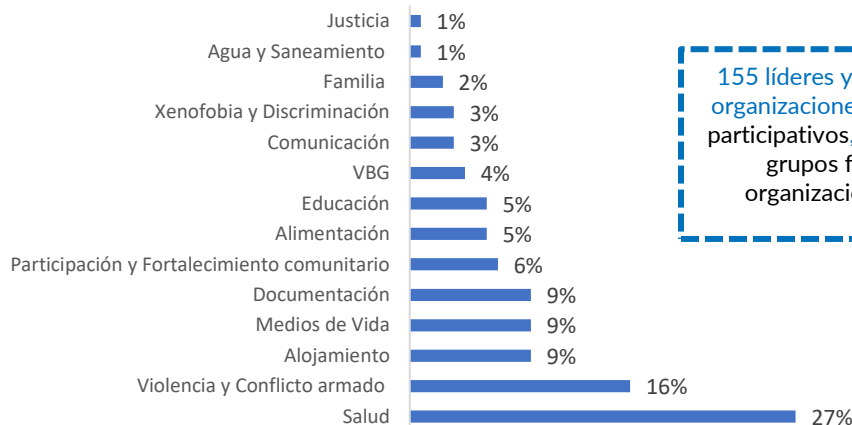


DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS CON ORGANIZACIONES DE POBLACIÓN VENEZOLANA REFUGIADA Y MIGRANTE PROVENIENTE DE VENEZUELA 2020

- Los **diagnósticos participativos** con personas refugiadas y migrantes venezolanas pertenecientes a organizaciones de base comunitaria fueron realizados por ACNUR y sus socios en **Atlántico, Norte de Santander, Nariño y Putumayo**.
- Tienen como objetivo analizar los riesgos de protección y las posibles soluciones **CON** las personas de interés del ACNUR, fortalecer su **participación**, sus **capacidades** y sus **habilidades** e involucrarlas en el diseño, la planeación, la implementación, el monitoreo y evaluación del ciclo de programa, teniendo en cuenta un enfoque de **Edad, Género y Diversidad**.
- Analizan los **riesgos de protección** con un **enfoque mixto** desde la salida del país de origen, el acceso al territorio colombiano y su permanencia en Colombia, y/o las condiciones de vida y necesidades durante o después del desplazamiento forzado.

Necesidades Identificadas por Organizaciones de población venezolana



155 líderes y lideresas sociales y miembros de organizaciones participaron en los diagnósticos participativos, de un total de 1450 personas; 22 grupos focales fueron realizados con organizaciones de población venezolana.



“Uno termina asumiendo no solo el rol de líder, uno termina como mamá, enfermera, mediadora, gestionando ante todos los actores, inclusive actores armados... Uno se expone, se expone mucho”. Lideresa venezolana, Norte de Santander



RIESGOS Y/O NECESIDADES IDENTIFICADOS

Los miembros de organizaciones de población venezolana identificaron una serie de riesgos y/o necesidades prioritarias a partir de las cuales establecieron las acciones de respuesta para su mitigación.

SALUD

- Dificultad para el acceso a atención médica. Esta se limita exclusivamente a la atención en urgencias.
- Barreras de acceso a controles prenatales y a asistencia médica de primer y segundo nivel.
- Prevalencia de problemas de salud mental a causa de las medidas de aislamiento social, dificultades económicas e incertidumbre general en el contexto de la pandemia.
- Falta de atención y cobertura en servicios de salud para personas en situación de discapacidad.
- Ausencia de apoyo o acompañamiento psico-social, servicios psicológicos y altos costos en atención y medicamentos psiquiátricos.
- Debilidad de afiliación a Seguridad Social.
- Prevalencia de enfermedades crónicas y respiratorias, lo cual aumenta el riesgo en caso de contagio de COVID-19.
- Temor y riesgo de adquisición de ITS – VIH/SIDA por falta de acceso a anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva.
- Riesgo/miedo de contagio de COVID-19 (especialmente personas en situación de calle y confinadas – mujeres que ejercen la venta e intercambio de sexo como mecanismo negativo de supervivencia, personas con identidad de género diversa).
- Falta de recursos para pagar la atención médica, ya sea en el sector público o privado.
- Alto riesgo de contagio de COVID-19 por la inobservancia de los protocolos de bioseguridad: hacinamiento, contacto cercano, no utilización de elementos de bioseguridad o falta de acceso a estos (desinfectante, tapabocas, mascarillas, entre otros).

VIOLENCIA Y CONFLICTO ARMADO

- Amenazas y agresiones contra liderazgos sociales por parte de grupos armados ilegales.
- Presencia de actores armados ilegales en los territorios.
- Desconocimiento por parte de las instituciones de los derechos de la población refugiada y migrante.

- Reclutamiento, uso y vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA) por parte de grupos armados ilegales.
- Inseguridad urbana (en los barrios) por presencia de grupos armados ilegales, microtráfico, fronteras invisibles, robos y atracos.
- Incremento del desplazamiento forzado a causa de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y amenazas a la población.
- Las personas de interés (PoC) desconocen diferentes situaciones del contexto colombiano, lo que conlleva a una subvaloración de los riesgos.
- Dificultad de acceso a las ayudas humanitarias que ofrece el Gobierno Nacional y la cooperación internacional por el incremento de las necesidades a causa de la pandemia.
- Las organizaciones de base comunitaria (OBC) no tienen una ruta de atención humanitaria clara frente a la emergencia de la COVID 19.
- Presencia de actores armados cerca de asentamientos de comunidades con vocación de permanencia.

ALOJAMIENTO

- Falta de recursos para pagar el arriendo a causa de la disminución de ingresos en el contexto de la COVID-19.
- Desalojos por falta de recursos para pagar el arriendo.
- Condiciones habitacionales críticas (hacinamiento).
- Ante el incremento de situación de calle, se intensifica el riesgo de contagio y las situaciones de discriminación y exclusión hacia PoC.

MEDIOS DE VIDA

- Aumento del desempleo y crecimiento de la informalidad para la población refugiada y migrante a causa del cierre de negocios y de la disminución de la actividad económica. Esta situación ha generado una disminución de ingresos que ha afectado a las PoC y a los miembros de las organizaciones.

- Falta de ingresos de actividades económicas informales causadas por las medidas de distanciamiento social.
- Riesgo de mendicidad a causa de la disminución de ingresos en los hogares y la intensificación de las necesidades básicas.

DOCUMENTACIÓN

- Dificultad para el acceso a regularización a causa de la falta de documentación y el desconocimiento de los procesos y rutas.
- Incremento de ingresos al país de personas con situación irregular.
- Limitaciones en el registro de niños nacidos en Colombia de padres venezolanos, lo que ha generado el incremento del riesgo de apatridia.
- Entrada al país a través de pasos informales ("trochas").
- Incremento de retornos al lugar de origen en condiciones de alto riesgo, vulnerabilidad, pérdida de dignidad y sin suficientes condiciones de seguridad.

PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

- Dificultades para convocar y reunir a los miembros de las organizaciones a causa de las medidas de aislamiento social.
- Dificultades para atender y dar respuesta a las necesidades de la población debido a las medidas de confinamiento y distanciamiento social lo que dificulta la movilización y el acceso a determinados territorios y/o barrios.
- Inconformidad de la población de interés con las gestiones de los líderes/lideresas sociales o de las organizaciones de base comunitaria.
- Escasa participación/organización comunitaria.
- Sobreexposición y sobrecarga de líderes y lideresas en el desarrollo de su rol a nivel comunitario.
- Tensiones o problemas con otras organizaciones u otros líderes/lideresas por acceso a las ayudas humanitarias.
- Ausencia de red(es) de apoyo.

ALIMENTACIÓN

- Dificultades de acceso a los alimentos: falta de recursos para comprar alimentos y precios elevados.

- Desnutrición.
- Inseguridad Alimentaria.
- Cierre de comedores comunitarios de cooperación internacional y oferta institucional.
- Falta de lugares/implementos para preparación de alimentos.

EDUCACIÓN

- Falta de tiempo para acompañar a los hijos e hijas en actividades académicas y de cuidado.
- Complicaciones para asumir o delegar el cuidado de los NNA a cargo de las familias.
- Falta de vinculación de niños de 0-5 años en los programas de atención a la primera infancia.

VBG

- Incremento de la venta e intercambio de sexo como mecanismo negativo de supervivencia, a causa de la disminución de ingresos en los hogares y el desempleo.
- Riesgo de VBG.
- Baja cobertura y débil respuesta de las instituciones respecto a las rutas de atención y protección ante situaciones de VBG.

COMUNICACIÓN

- Falta de acceso a internet.
- Desconocimiento sobre instituciones y rutas de atención sobre síntomas y tratamiento de la COVID-19.
- Ausencia de medios o canales para hacer solicitudes e interponer quejas o reclamos.
- Las OBC no obtienen retroalimentación de las personas de interés porque no hay canales efectivos de comunicación.
- Dificultad para identificar información confiable y verídica (especialmente para personas en situación de calle y en general para cada uno de los grupos poblacionales con sus distintos niveles de vulnerabilidad).
- Instrumentalización de las OBC de población venezolana para la búsqueda de información. Estas acciones generan falsas expectativas para las organizaciones y para las PoC.

XENOFOBIA Y DISCRIMINACIÓN

- Incremento de estigma y xenofobia en contra de la población venezolana.
- Discriminación y/o xenofobia en el entorno laboral.
- Amenazas y/o agresiones por motivo de la nacionalidad.

“Como líderes tuvimos que ir a algunas instituciones a pedir ayuda”.

“Hemos tenido que pedir apoyo para ayudar a muchas familias aquí, por ejemplo, en la cuestión de alimentación hemos pedido ayuda a varios centros cristianos, a los pastores, a los CDI”

(Líderes sociales, Norte de Santander)

FAMILIA

- Incremento de violencia intrafamiliar a causa de los largos periodos de confinamiento.
- Casos de fragmentación y desintegración familiar.
- Falta de tiempo en familia.
- Desintegración familiar

CAPACIDADES IDENTIFICADAS POR LA POBLACIÓN

En los diagnósticos participativos realizados con personas pertenecientes a organizaciones de población venezolana, se identificaron diversas capacidades, entre las cuales vale destacar:

- Capacidad de las organizaciones como referentes para las PoC para asesoría sobre el acceso a asistencia humanitaria y entrega de kits.
- Reconocimiento del trabajo social de las organizaciones por parte de las instituciones locales y las JAC.
- Capacidad de movilización para la atención de las necesidades de la población venezolana.
- Capacidad de las organizaciones como multiplicadores de información sobre riesgos y prevención frente a la COVID-19.
- Capacidad para la participación en las reuniones de las JAC para articulación de acciones de atención a la población.
- Capacidad de gestión y mediación de líderes y lideresas con propietarios y arrendatarios para evitar desalojos.
- Capacidad de líderes y lideresas en la identificación de casos vulnerables y gestión o referencia a organizaciones internacionales o instituciones públicas responsables.
- Capacidades para el acceso y uso de medios y canales de comunicación confiables y seguros para difundir información a las PoC.
- Capacidad de las organizaciones para la generación de confianza en la comunidad.

ACCIONES PRIORIZADAS POR LA POBLACIÓN

- Gestionar la flexibilización de los procedimientos de regularización, para que puedan tramitarse sin necesidad de tener un pasaporte y la población pueda acceder a los servicios básicos.
- Solicitar a las instituciones públicas locales que le entreguen un pase de movilidad a las líderes sociales para que puedan realizar su labor social sin inconvenientes y puedan socializar con las organizaciones e instituciones información relevante sobre la población venezolana con necesidad de protección internacional.
- Apoyar en la prevención de los desalojos.
- Mejorar la articulación con las instituciones públicas para garantizar el acceso de las mujeres gestantes a la atención médica.
- Fortalecer el rol de los voluntarios.
- Fortalecer las capacidades de las organizaciones para que puedan encontrar respuestas favorables a las necesidades de la población (desalojos, alimentación, etc.).
- Generar canales de comunicación entre los grandes actores humanitarios (CISP, CICR, ACNUR) y las autoridades locales para que se incluya a la población venezolana en los programas y ayudas sociales.
- Actualizar y utilizar los mapeos/censos de población vulnerable realizados por las organizaciones venezolanas para que las personas con mayor necesidad de protección accedan a ayudas y beneficios sociales.
- Formar a los funcionarios públicos sobre los derechos de la población refugiada y migrante.
- Atención en temas psicológicos/asistencia psicosocial.
- Donación/adquisición de elementos como tablets, celulares, paquetes de internet.
- Socializar líneas de atención y emergencia en las comunidades.
- Desarrollo de acciones para la prevención de la xenofobia en las comunidades barriales e instituciones públicas.
- Mayor orientación y acompañamiento a la población retornada para el acceso efectivo a rutas de atención y protección del Estado colombiano.
- Donación de equipos de cómputo (tabletas, computadores, teléfonos) y garantizar el acceso a internet, sobre todo a las familias más vulnerables para que los niños tengan garantizado su derecho a la educación en el marco de la actual emergencia de la COVID-19.
- Acceso a insumos de bioseguridad y charlas preventivas para evitar el contagio de la COVID-19.
- Estrategias y/o programas de medios de vida y generación de ingresos, que faciliten la recuperación tras la crisis.
- Apoyos para líderes y lideresas en el pago de planes de teléfono (minutos y datos) para fortalecer su ejercicio de comunicación y gestión con la comunidad, cooperación internacional y autoridades.